

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN**

**CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO,
INC., HERMES AYALA GUZMÁN**

Recurrentes

v.

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTALES; OFICINA DE
GERENCIA DE PERMISOS**

Recurridas

Civil Núm.:

Sala:

Sobre: Derecho
constitucional de acceso a
la información pública

RECURSO ESPECIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

AL TRIBUNAL:

COMPARECEN las partes recurrentes, el **Centro de Periodismo Investigativo, Inc.**, y **Hermes Ayala Guzmán**, por conducto de la representación legal que suscribe, y **EXPONE, ALEGA** y **SOLICITA:**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

1.1. La Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia ostenta jurisdicción y competencia para entender en el caso de epígrafe en virtud del Artículo 9 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9919 (2020).

II. LAS PARTES

2.1. La parte recurrente, **CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, INC.** (en adelante, CPI), es una corporación sin fines de lucro debidamente organizada bajo las leyes de Puerto Rico. Su Directora Ejecutiva es la periodista Carla Minet Santos Santiago. Su dirección es: PO Box 6834, San Juan, Puerto Rico 00914-6834. Su teléfono es el (787) 751-1912, ext. 3022.

2.2. El CPI se dedica, entre otras cosas, a la realización de investigaciones periodísticas y a la publicación de reportajes producto de tales investigaciones. Su página web es: <http://periodismoinvestigativo.com/>.

2.3. La parte recurrente, **HERMES AYALA GUZMÁN** es una persona natural, mayor de edad, periodista y vecino de Vega Baja, Puerto Rico. Su dirección

física y residencial es 86-B Calle Júpiter Barriada Sandin Vega Baja PR 00693. Su teléfono es el (787) 245-9364.

2.4. El Sr. Ayala Guzmán recibió una beca del Instituto de Formación Periodística del CPI para publicar una historia sobre temas ambientales relacionada a la información solicitada en el presente litigio. Véase *Instituto de Formación Periodística anuncia nuevos ganadores de becas para hacer reportajes investigativos*, CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, 18 de enero de 2021, disponible en <https://periodismoinvestigativo.com/2021/01/instituto-de-formacion-periodistica-anuncia-nuevos-ganadores-de-becas-para-hacer-reportajes-investigativos/> (última visita el 22 de noviembre de 2021).

2.5. La parte recurrida, **DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES** (en adelante, DRNA), fue creado en virtud de la Ley Núm. 23 del 20 de junio de 1972, según enmendada, 3 LPRA §§ 151-163 (2020). El Secretario del DRNA es el licenciado Rafael Machardo Maldonado. La dirección física del Departamento es Carretera 8838, km. 6.3, Sector El Cinco, Río Piedras, PR 00926. Su dirección postal es San José Industrial Park, 1375 Ave Ponce de León, San Juan, PR 00926. Su teléfono es (787) 999-2200.

2.6. La parte recurrida, **OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS** (en adelante, OGPe), fue creada en virtud de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos en Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, según enmendada, 23 LPRA §§ 9011-9028i (2020). De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.1 de la Ley de Permisos, 23 LPRA § 9012 (2020), la OGPe es una Secretaría Auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El Secretario Auxiliar de la OGPe es el ingeniero Gabriel Hernández Rodríguez. La dirección física de la OGPe es Edificio de PRIDCO, 355 Ave. Franklin Delano Roosevelt, San Juan, PR 00918. Su dirección postal es PO Box 41179, San Juan, PR 00940. Su teléfono es (787) 758-4747.

III. LOS HECHOS

A. La solicitud de información al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

3.1. El 23 de abril de 2021, el Sr. Ayala Guzmán, como periodista becado por el Instituto de Formación Periodística del CPI, envió un correo electrónico al Sr. Joel Seijo, Director de Prensa del DRNA, en el cual anejó una misiva solicitando la siguiente información:

- I. El protocolo por escrito con el cual el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales rige y supervisa las remociones de corteza terrestre y las talas y podas de árboles desde 2009, luego de la derogación del Reglamento 25, y el reenfoque de esto hacia la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE) tras el desarrollo del Reglamento Conjunto bajo la administración Fortuño. ¿Existe algún borrador que lo sustituya en el que se esté trabajando? ¿Se rige todo mediante la Ley 133 de Bosques?
- II. Informes anuales de querellas que correspondan a talas de árboles desde 2009 hasta 2017
- III. A) Documentos e informes de permisos aprobados para poda, tala y remoción de corteza terrestre aprobados tras las emergencias de María e Irma en 2017, según los acuerdos establecidos por FEMA con el DRNA y el DRD, los acuerdos establecidos con los Municipios.
B) Documentos de contratos avalados por el DRNA con empresas privadas para esta u otras agencias y/o municipios, para tala, poda y remoción de corteza terrestre en y luego de 2017.
Además de:
 - a. Documentos de denuncias /querellas de 2018 que correspondan a talas de árboles
 - b. Documentos de denuncias /querellas de 2019 que correspondan a talas desmedidas de árboles
 - c. Documentos de denuncias /querellas de 2020 que correspondan a talas desmedidas de árboles
 - d. Documentos de denuncias /querellas de 2021 que correspondan a talas desmedidas de árboles
- IV. Imágenes aéreas y/o mapas que tengan de las siguientes zonas:
 - a. Zona Playa de Cerro Gordo en Vega Alta
 - b. Zona costera de Punta Santiago en Humacao
 - c. Zona del parque Monagas en Bayamón
 - d. Zona de la costa de Loíza
- V. Modificación de nómina en el DRNA luego de la Ley 7 de 2009
- VI. Cualquier información que tengan correspondiente a la Unidad de Bosques que hay (¿o hubo?) en el DRNA.

Anejos 1-2.

3.2. Pese a que el Sr. Ayala Guzmán le dio seguimiento a la solicitud en varias ocasiones durante los meses de junio, septiembre y octubre de 2021, ante ambos el Sr. Seijo y el Sr. Aniel Bigio, Oficial de Prensa del DRNA, la parte recurrida no entregó la información solicitada. **Anejos 3-8.**

3.3. Ante la falta de respuesta a su solicitud, y con el fin de aclarar varios de los documentos e información solicitados, el 21 de octubre de 2021, la representación legal del Sr. Ayala Guzmán cursó una nueva comunicación al DRNA, dirigida al Lcdo. Marchado Maldonado y enviada al Sr. Seijo y al Sr. Bigio, en la cual solicitó la siguiente información:

1. Cualquier documento, protocolo o guía que utilice el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para la evaluación de permisos sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles, además de las leyes y reglamentos aplicables.

2. Número de querellas sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles, presentadas ante el DRNA para los siguientes períodos:

- a. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005
- b. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006
- c. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007
- d. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008
- e. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009
- f. Del 1 de enero al 29 de octubre de 2010
- g. Del 30 de octubre al 31 de diciembre de 2010
- h. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
- i. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
- j. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
- k. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
- l. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
- m. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
- n. Del 1 de enero al 19 de septiembre de 2017
- o. Del 20 de septiembre al 31 de diciembre de 2017

3. Copia de todas las querellas sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles presentadas ante el DRNA desde el 21 de septiembre de 2017 al presente.

4. Copia de todos los permisos sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles aprobados desde el 21 de septiembre de 2017 al presente.

5. Copia de cualquier acuerdo colaborativo, memorando de entendimiento o escrito sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles suscrito por el DRNA con agencias y entidades del gobierno federal o agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico, entre el 1 de enero de 2005 y el presente, o que, habiéndose suscrito con anterioridad a esas fechas, permanezca en vigor.

6. Cualquier imagen o fotografía aérea de las siguientes zonas entre el 1 de enero de 2005 y el presente, con indicación de la fecha de cada imagen, para las siguientes áreas:

- a. Playa Cerro Gordo, Vega Alta
- b. Parque Monagas, Bayamón
- c. Zona costera del Municipio de Loíza
- d. Zona costera de Punta Santiago en el Municipio de Humacao

7. Nombre, fecha de nombramiento, puesto, fecha de terminación (si la tuviese) y salario de todos los empleados/as del DRNA, para cada año fiscal desde el 2004-2005 al presente.

8. Gasto total de nómina del DRNA para cada año fiscal desde el 2004-2005 al presente.

9. Número de empleados/as del DRNA en destaque (con indicación de las agencias, entidades gubernamentales o municipios en los que están destacados/as), para cada año fiscal desde el 2004-2005 al presente.

10. Número de empleados/as para cada año fiscal desde el 2004-2005 al presente que trabajan en la Unidad de Bosques, la División de Tala y Poda de Árboles o cualquier oficina similar que exista o hubiere existido anteriormente en el DRNA.

Anejos 9-11.

3.4. El DRNA no contestó la referida comunicación. No obstante, el 25 de octubre de 2021, el Sr. Bigio envió un correo electrónico al Sr. Ayala Guzmán en el que parece responder parcialmente, en cambio, a la solicitud de información cursada en abril de 2021, y que incluyó un documento titulado “Informe sobre querellas recibidas por Ley 133 en el Cuerpo de Vigilantes durante el período del 2009 a septiembre de 2021”, y respuestas a dos de los requerimientos originalmente cursados. **Anejos 12-13.**

3.5. Pese a todas las gestiones antes mencionadas, al día de hoy, el DRNA no ha respondido a la solicitud cursada por la representación legal del Sr. Ayala Guzmán y mucho menos ha hecho entrega de la información solicitada.

B. La solicitud de información a la Oficina de Gerencia de Permisos

3.6. El 19 de mayo de 2021, el Sr. Ayala Guzmán, como periodista becado por el Instituto de Formación Periodística del CPI, envió un correo electrónico a la Sa. Jessica Colón Rivera, Ayudante Especial del Secretario Auxiliar de la OGPe, en el cual anejó una misiva solicitando la siguiente información:

I. El protocolo por escrito con el cual la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) rige y supervisa la permisología para las remociones de corteza terrestre y las talas y podas de árboles desde 2009, luego de la derogación del Reglamento 25, y el reenfoque desde el DRNA hacia OGPe tras el desarrollo del Reglamento Conjunto bajo la

administración Fortuño. ¿Existe en OGPE algún borrador que lo sustituya? ¿Se rige todo mediante la Ley 133 de Bosques?

II. Informes anuales de permisos que correspondan a talas de árboles desde 2009 hasta 2017

III. Documentos e informes de permisos aprobados para poda, tala y remoción de corteza terrestre aprobados tras las emergencias de María e Irma en 2017, según los acuerdos establecidos por FEMA con el DRNA y el DRD, los acuerdos establecidos con los Municipios.

Anejos 14-15.

3.7. Pese a que el Sr. Ayala Guzmán le dio seguimiento a la solicitud en varias ocasiones durante los meses de mayo y junio de 2021, **Anejos 16-17**, y que se logró coordinar una entrevista del Sr. Ayala Guzmán con el ingeniero Hernández Rodríguez, Secretario Auxiliar de la OGPe, la parte recurrida no entregó la información solicitada.

3.8. Ante la falta de respuesta a su solicitud, y con el fin de aclarar varios de los documentos e información solicitados, el 21 de octubre de 2021, la representación legal del Sr. Ayala Guzmán cursó una nueva comunicación a la OGPe, dirigida al Ing. Hernández Rodríguez y enviada a la Sa. Colón Rivera, en la cual solicitó la siguiente información:

1. Cualquier documento, protocolo o guía que utilice la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para la evaluación de permisos sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles, además de las leyes y reglamentos aplicables.

2. Número de querellas sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles presentadas ante la OGPe para los siguientes períodos:

- a. Del 30 de octubre al 31 de diciembre de 2010
- b. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
- c. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
- d. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
- e. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
- f. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
- g. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
- h. Del 1 de enero al 19 de septiembre de 2017
- i. Del 20 de septiembre al 31 de diciembre de 2017

3. Copia de todas las querellas sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles presentadas ante la OGPe desde el 21 de septiembre de 2017 al presente.

4. Copia de todos los permisos sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles, o permisos de uso incidental operacional relacionados a autorizaciones de corte, poda, trasplante y sistema de árboles aprobados desde el 21 de septiembre de 2017 al presente.

5. Copia de cualquier acuerdo colaborativo, memorando de entendimiento o escrito sobre tala y poda de árboles suscrito por la OGPe con agencias y entidades del gobierno federal o, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico, entre el 1 de enero de 2005 y el presente, o que, habiéndose suscrito con anterioridad a esas fechas, permanezca en vigor.

6. Cualquier imagen o fotografía aérea de las siguientes zonas entre el 1 de enero de 2005 y el presente, con indicación de la fecha de cada imagen, para las siguientes áreas:

- a. Playa Cerro Gordo, Vega Alta
- b. Parque Monagas, Bayamón
- c. Zona costera del Municipio de Loíza
- d. Zona costera de Punta Santiago en el Municipio de Humacao

Anejos 18-19.

3.9. La OGPe no contestó la referida comunicación. Así, pese a todas las gestiones antes mencionadas, al día de hoy, la OGPe no ha respondido a la solicitud cursada por la representación legal del Sr. Ayala Guzmán y mucho menos ha hecho entrega de la información solicitada.

IV. CAUSA DE ACCIÓN

A. Denegatoria de Solicitud de Acceso a la Información Pública

4.1. Las partes recurrentes acogen, adoptan por referencia y hacen formar parte de la presente causa de acción todos los hechos alegados en los párrafos anteriores del presente recurso.

4.2. El derecho de acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental. Kilómetro 0 v. Pesquera López, 2021 TSPR 72, en la pág. 7; Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 199 DPR 59, 80 (2017); Trans Ad PR v. Junta Subastas, 174 DPR 56, 67 (2008); Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007); Ortiz v. Dir. Adm. Tribunales, 152 DPR 161, 175 (2000); Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 477 (1982).

4.3. Dicho derecho emana de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. CONST. PR, Art. II, § 4. Véase también Kilómetro 0, 2021 TSPR 172, en la pág. 7; Engineering Services International, Inc. v. AEE, 2020 TSPR 103, en la pág. 7; Bhatia

Gautier, 199 DPR en la pág. 80; Trans Ad PR, 174 DPR en la pág. 67; Nieves v. Junta, 160 DPR 97, 102 (2003); Ortiz, 152 DPR en la pág. 175; Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 477, 485 (1982).

4.4. El derecho de acceso a la información pública es también reconocido en varios tratados internacionales como un derecho humano fundamental, En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha reconocido que:

[E]l derecho de acceso a la información es una herramienta crítica para el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública, y para el control de la corrupción. El derecho de acceso a la información es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión pública del gobierno y de las restantes autoridades estatales. El pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es una garantía indispensable para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal y prevenir la corrupción y el autoritarismo. De otra parte, el libre acceso a la información es un medio para que, en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía pueda ejercer adecuadamente sus derechos políticos. Ciertamente, los derechos políticos tienen como presupuesto la existencia de un debate amplio y vigoroso para el cual es indispensable contar con la información pública que permita evaluar con seriedad los avances y las dificultades de los logros de las distintas autoridades. Sólo a través del acceso a la información bajo el control del Estado es posible que los ciudadanos puedan saber si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones públicas. Finalmente, el acceso a la información tiene una función instrumental esencial. Solamente a través de una adecuada implementación de este derecho las personas pueden saber con exactitud cuáles son sus derechos y qué mecanismos existen para protegerlos. En particular, la implementación adecuada del derecho de acceso a la información, en todas sus dimensiones, es condición esencial para la realización de los derechos sociales de los sectores excluidos o marginados. En efecto, estos sectores no suelen tener formas alternativas sistemáticas y seguras para conocer el alcance de los derechos que el Estado ha reconocido y los mecanismos para exigirlos y hacerlos efectivos.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO JURÍDICO INTERAMERICANO 2-3 (2da ed. 2012) (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión), disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%202012%202da%20edicion.pdf> (última visita el 22 de noviembre de 2021).

4.5. Así, en Claude Reyes y otros v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151 (Corte Interamericana de Derechos Humanos), enfrentado a una reclamación

incoada por un grupo de personas y organizaciones no gubernamentales contra el Gobierno de Chile, ante su negativa de brindarles toda la información que requerían del Comité de Inversiones Extranjeras en relación con un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en la Decimosegunda Región de Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló lo siguiente:

84. Este Tribunal ha expresado que “[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y constituye “un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano”. La Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones consideró que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información.

85. La Corte Interamericana ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que

[...] la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también *conditio sine qua non* para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

86. En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso.

87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.

Id. en los ¶¶ 84-87.

4.6. Tanto la Declaración Americana en su art. IV (“Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”), como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 19 (“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”), generan obligaciones para Estados Unidos y sus territorios, exigiendo que la gestión estatal del gobierno de Puerto Rico se rija por “los principios de máxima divulgación y buena fe”. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO JURÍDICO INTERAMERICANO, *supra*.

4.7. De igual forma, los principios 2 al 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la CIDH, reconocen la naturaleza fundamental del derecho de acceso a la información, e imponen a los Estados y sus territorios una obligación de máxima divulgación, que “sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”. *Principios sobre Libertad de Expresión*, <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosLE.asp> (última visita el 22 de noviembre de 2021).

4.8. El derecho de acceso a la información también encuentra su justificación en los supuestos básicos de la vida en sociedades democráticas. Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590 (“[E]l acceso a la información constituye un componente importante de una sociedad democrática, en donde el ciudadano puede emitir un juicio informado sobre las actuaciones del Gobierno”.); Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 80 (“El acceso a la información pública constituye un pilar fundamental en toda sociedad democrática”); Engineering Services International, 2020 TSPR 103, en la pág. 7.

4.9. Ello se debe a que, “en una sociedad democrática, ‘resulta imperativo reconocer al ciudadano común el derecho legal de examinar e investigar cómo

se conducen sus asuntos”. Kilómetro 0, 2021 TSPR 172, en la pág. 8 (citando a Ortiz, 152 DPR en la pág. 175).

4.10. Después de todo, “[s]in conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco se puede exigir remedios a los agravios gubernamentales mediante los procedimientos judiciales o a través del proceso de las urnas cada cuatro (4) años”. Soto, 112 DPR en la pág. 485. Véase también Bhatia Gautier, 199 DPR en las págs. 80-81.

4.11. Además, el derecho de acceso a la información “es un catalizador indispensable de la participación ciudadana”. Engineering Services International, 2020 TSPR 103, en la pág. 8. Véase también Trans Ad PR, 174 DPR en la pág. 70.

4.12. Visto de esta manera, el derecho al acceso a la información sirve de garante de todo régimen que aspira a ser democrático. En palabras del profesor Efrén Rivera Ramos:

Cualquiera que sea la definición que adscribamos al concepto “democracia”, su principio cardinal es que el poder político ha de residir en el pueblo y que los gobernantes ejercen sus funciones para el pueblo y por mandato de éste. Mal podría gobernarse a sí mismo un pueblo que estuviere ajeno a cuanto sucede en la conducción de sus asuntos.

Efrén Rivera Ramos, *La libertad de información: Necesidad de su reglamentación en Puerto Rico*, 44 REV. JUR. UPR 67, 69 (1975). Véase también Luis F. Estrella Martínez, *La libertad de información como elemento necesario para el Acceso a la Justicia*, 55 REV. DER. PR 23 (2016); Carlos Ramos Hernández, *Acceso a la información, transparencia y participación política*, 85 REV. JUR. UPR 1015 (2016); Érika Fontánez Torres, *El derecho a participar: Normas, estudios de caso y notas para una concreción*, 68 REV. JUR. COL. ABOG. PR 631, 656-57 (2007); Luis Villanueva Nieves, *Sobre el derecho a saber y la obligación de revelar*, 37 REV. JUR. U. INTER PR 217 (2003).

4.13. Dada la importancia de este derecho, “[e]l Estado . . . no puede negar caprichosamente y sin justificación aparente la información recopilada en su

gestión pública”. Soto, 112 DPR en la pág. 489; Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590; Santiago v. Bobb y El Mundo, 117 DPR 153, 158 (1986).

4.14. Ello se debe a que “al recibir del Pueblo soberano la función de gobernar, el Estado no quedó en libertad de decidir cuáles papeles y documentos resultantes de su gestión pública estarían fuera del escrutinio de quienes son, en esencia, la fuente misma de la soberanía”. Soto, 112 DPR en la pág. 489.

4.15. Así, “la secretividad en los asuntos públicos es excepción y no norma”. Kilómetro 0, 2021 TSPR 172, en la pág. 9 (citando a Santiago, 117 DPR en la pág. 159).

4.16. Además, en la tarea de garantizar este derecho, “la prensa constituye ‘un vehículo de información y opinión [para] informar y educar al público, ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar como sustituto para obtener noticias e información para sus lectores, que por sí y como individuos no pueden o desean recopilarla’”. Santiago, 117 DPR en la pág. 159.

4.17. Recientemente, el Relator Independiente sobre Libertad de Expresión de la CIDH, incluyó en su informe anual 2019, expresiones específicas sobre el trabajo de los periodistas en Puerto Rico, indicando que “continúa observando un contexto de hostilidad hacia el ejercicio de periodismo y el libre funcionamiento de los medios de comunicación”, y señalando su preocupación por el contexto de ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación. En este sentido reafirmó que “la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión*, 24 de febrero de 2020, OEA/Ser.L/V/II, en las págs. 158, 161 (¶¶ 616, 637), disponible en <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ESPIA2019.pdf> (última visita el 22 de noviembre de 2021).

4.18. Por otra parte, el derecho al acceso a la información, en su modalidad de acceso a documentos públicos, encuentra reconocimiento estatutario en el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 1781 (2020), el cual establece, que “[t]odo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley”. *Id.*

4.19. Igualmente, la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA §§ 9911-9923 (2020), establece como política pública, lo siguiente:

1. La información y documentación que produce el gobierno se presume pública y accesible a todas las personas por igual.
2. La información y documentación que produce el gobierno en sus estudios, transacciones y en el ejercicio de la autoridad pública, de manera directa o delegada, son patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico.
3. El derecho constitucional de acceso a la información requiere la transparencia gubernamental.
4. Toda información o documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero, se presume público y debe estar accesible al Pueblo y la prensa.
5. El derecho de acceso a la información pública es un pilar constitucional y un derecho humano fundamental.
6. El acceso a la documentación e información pública tiene que ser ágil, económico y expedito.
7. Toda persona tiene derecho a obtener la información y documentación pública, sujeto a las normas y excepciones aplicables.
8. El Gobierno de Puerto Rico establece en la presente Ley una política de apertura a la información y documentación, que incluya la disponibilidad de la tecnología y de los avances necesarios para hacer valer el derecho de los solicitantes a acceder a la información y documentación pública de forma oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles, inalterados e íntegros.

Art. 3, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9913 (2020).

4.20. A su vez, la frase ‘documento público’ es definido en la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico como

[T]odo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga conservar [o] que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal.

Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.

3 LPRA § 1001 (2020).

4.21. Visto de esta manera, el que la información solicitada no conste en un documento impreso, aunque sí sea accesible de forma electrónica, no impide que sea clasificada como información pública o que pueda ser divulgada a petición de cualquier persona. Véase Centro de Periodismo Investigativo v. García Padilla, et al., KLAN 2015-01585 (Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 11 de abril de 2016) (“Las múltiples formas en las que hoy día se genera, recibe e incluso se almacena o conversa información, y que no se limita . . . a información recogida en un formato de papel, no puede impedir, como norma general, que la información de carácter pública pueda ser divulgada . . .”).

4.22. En virtud de lo anterior, “[u]na vez un documento es catalogado como público, todo ciudadano y ciudadana, por el hecho de serlo, tiene legitimación activa para solicitar y acceder a información pública”. Engineering Services International v. AEE, 2020 TSPR 103, en la pág. 9. Véase también Kilómetro 0, 2021 TSPR 72, en la pág. 10.

4.23. De igual forma, “la alegada onerosidad de reproducir documentación no es fundamento suficiente para coartar el derecho de acceso a la información pública y los principios de transparencia y participación ciudadana” que obligan al Estado. *Id.* en la pág. 28.

4.24. Ahora bien, pese a la naturaleza fundamental del derecho al acceso a la información, el mismo no es un derecho absoluto, “sino que pueden existir intereses apremiantes del estado que justifiquen un reclamo de confidencialidad de su parte”. Trans Ad de PR, 174 DPR en la pág. 68; Angueira v. JLBP, 150 DPR 10, 24 (2000); Soto, 112 DPR en la pág. 493. Véase también Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 82.

4.25. Así, cuando el Estado interesa invocar la confidencialidad de documentos o información pública, “debe probar **de forma precisa e inequívoca** la aplicabilidad de alguna de las siguientes excepciones: (1) que una ley así lo

declara; (2) que la comunicación está protegida por algún privilegio evidenciario; (3) que la divulgación de la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) se trate de un confidente, según la Regla 515 de Evidencia de 2009, o (5) que sea información oficial conforme a la Regla 514 de Evidencia de 2009”. Kilómetro 0, 2021 TSPR 72, en las págs. 10-11 (énfasis suplido). Véase también Engineering Services International, 2020 TSPR 103, en la pág. 10; Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 83; Trans Ad PR, 174 DPR en la pág. 68; Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590; Santiago, 117 DPR en la pág. 159.

4.26. En estos casos, el Estado “tiene la carga de probar que satisface cualquiera de las excepciones antes enumeradas”, Kilómetro 0, 2021 TSPR 72, en la pág. 11; Engineering Services International, 2020 TSPR 103, en la pág. 11; Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 83; Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590; Angueira, 150 DPR en la pág. 24; Santiago, 117 DPR en la pág. 159, por lo que no puede descansar en “meras generalizaciones” para invocar exitosamente alguna de estas excepciones. Kilómetro 0, 2021 TSPR 72, en la pág. 11; Engineering Services International, 2020 TSPR 103, en la pág. 11; Santiago, 117 DPR en la pág. 159.

4.27. Por consiguiente, es deber del Estado dar una “explicación detallada” de la excepción invocada, Bathia Gautier, 199 DPR en la pág. 91, que permita acreditar su validez, y los tribunales deben examinar estos reclamos con suma cautela. Santiago, 117 DPR en la pág. 159 (Los tribunales deben ser “cautelosos en conceder livianamente cualquier pedido de confidencialidad del Estado”). Véase también Kilómetro 0, 2021 TSPR 72, en la pág. 11.

4.28. Por último, la mera invocación de una ley como fundamento para restringir el acceso a la información no es suficiente para avalar la existencia de una de las excepciones a dicho derecho. Del texto de la ley debe surgir la clara intención del legislador de mantener ciertos documentos bajo el palio de la confidencialidad. Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 592 (“[N]o podemos menos que exigirle a la Asamblea Legislativa una orden clara y terminante.”).

4.29. De igual manera, al examinar el texto de la ley invocada, ésta “debe ser interpretada restrictivamente a favor del acceso [a la información]”. *Id.*

Además,

[T]oda ley que pretenda ocultar información a un ciudadano bajo el palio de la confidencialidad tiene que justificarse a plenitud. Ello se satisface si la legislación: (1) cae dentro del poder constitucional del Gobierno; (2) propulsa un interés gubernamental importante o sustancial; (3) el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libre expresión, y (4) la restricción concomitante del derecho a la libre expresión no es mayor que la esencial para propulsar dicho interés.

Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 592-93.

4.30. En sus expresiones más recientes sobre este tema, el Tribunal Supremo ha aclarado que “las restricciones impuestas por el aparato gubernamental [al acceso a la información] deben responder a un interés apremiante del Estado”, y no meramente a un interés importante o sustancial. Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 82. *Véase también* Kilómetro 0, 2021 TSPR 72, en la pág. 11 (expresando que “aquellas restricciones que el Estado impone en el acceso a la información deben satisfacer los criterios de un escrutinio estricto”); Engineering Services International, 2020 TSPR 103, en la pág. 11 (igual que Kilómetro 0).

4.31. Por último, en aquellos casos en los que el Estado logre invocar exitosamente algún reclamo de confidencialidad, procede entonces determinar si el interés público en divulgar la información excede el reclamo de privacidad. Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 130 DPR 919, 938 (1992) (“Para que el Estado prevalezca, éste debe presentar prueba y demostrar la existencia de intereses apremiantes de mayor jerarquía que los valores protegidos por este derecho de libertad de información de los ciudadanos. Nuestra función judicial es ‘resolver si determinada información está cubierta por el manto de secretividad y, de estarlo, si ello es compatible con el ejercicio de derechos constitucionales protegidos’.”) (citando a Soto, 112 DPR en la pág. 498).

4.32. Además, aun en casos en los que se avale un reclamo de confidencialidad por parte del Estado, debe hacerse un esfuerzo por proveer toda la

información pública no comprendida dentro de dicho reclamo, incluida la posibilidad de segregar o tachar aquellas partes confidenciales de documentos o expedientes públicos. Colón Cabrera, 170 DPR en las págs. 596-97. *Véase también* Kilómetro 0, 2021 TSPR 72, en la pág. 24.

4.33. En el presente caso, las solicitudes de información cursadas a las partes recurridas cumplen con los requisitos de forma y contenido establecidos en el Artículo 6 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9916 (2020).

4.34. A su vez, las partes contra las cuales se dirige el presente recurso tienen el deber de entregar la información solicitada.

4.35. La información solicitada por las partes recurrentes es originada, conservada y/o recibida por el DRNA y la OGPe. Por lo tanto, es información pública, a la cual cualquier persona puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita.

4.36. Al momento de presentar el presente recurso ya ha transcurrido el término dispuesto en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9917 (2020), para que las partes recurridas respondan a la solicitud o provean la información solicitada, sin que lo hubieran hecho.

4.37. Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico.

4.38. La información solicitada no está protegida de forma alguna por algún privilegio o reclamo de confidencialidad y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información.

4.39. Aún si las recurridas pudiesen invocar algún reclamo de confidencialidad o privilegio sobre la información solicitada, el interés público en acceder a la información supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto.

4.40. Las actuaciones y omisiones de las partes recurridas al negarse a proveer la información pública solicitada laceran el derecho constitucional de acceso a la información que asiste a las partes recurrentes.

4.41. En este caso procede el presente recurso a tenor con la normativa prevaleciente, en vista de lo cual procede que se ordene a las partes recurridas a proveer la información que les ha sido solicitada.

V. SÚPLICA

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, se solicita a este Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, declare **HA LUGAR** el presente recurso y, en consecuencia, ordene a las partes recurridas a proveer la siguiente información:

A. Al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA):

1. Cualquier documento, protocolo o guía que utilice el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para la evaluación de permisos sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles, además de las leyes y reglamentos aplicables.

2. Número de querellas sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles, presentadas ante el DRNA para los siguientes períodos:

- a. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005
- b. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006
- c. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007
- d. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008
- e. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009
- f. Del 1 de enero al 29 de octubre de 2010
- g. Del 30 de octubre al 31 de diciembre de 2010
- h. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
- i. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
- j. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
- k. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
- l. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
- m. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
- n. Del 1 de enero al 19 de septiembre de 2017
- o. Del 20 de septiembre al 31 de diciembre de 2017

3. Copia de todas las querellas sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles presentadas ante el DRNA desde el 21 de septiembre de 2017 al presente.

4. Copia de todos los permisos sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles aprobados desde el 21 de septiembre de 2017 al presente.

5. Copia de cualquier acuerdo colaborativo, memorando de entendimiento o escrito sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles suscrito por el DRNA con agencias y entidades del gobierno federal o agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico,

entre el 1 de enero de 2005 y el presente, o que, habiéndose suscrito con anterioridad a esas fechas, permanezca en vigor.

6. Cualquier imagen o fotografía aérea de las siguientes zonas entre el 1 de enero de 2005 y el presente, con indicación de la fecha de cada imagen, para las siguientes áreas:

- a. Playa Cerro Gordo, Vega Alta
- b. Parque Monagas, Bayamón
- c. Zona costera del Municipio de Loíza
- d. Zona costera de Punta Santiago en el Municipio de Humacao

7. Nombre, fecha de nombramiento, puesto, fecha de terminación (si la tuviese) y salario de todos los empleados/as del DRNA, para cada año fiscal desde el 2004-2005 al presente.

8. Gasto total de nómina del DRNA para cada año fiscal desde el 2004-2005 al presente.

9. Número de empleados/as del DRNA en destaque (con indicación de las agencias, entidades gubernamentales o municipios en los que están destacados/as), para cada año fiscal desde el 2004-2005 al presente.

10. Número de empleados/as para cada año fiscal desde el 2004-2005 al presente que trabajan en la Unidad de Bosques, la División de Tala y Poda de Árboles o cualquier oficina similar que exista o hubiere existido anteriormente en el DRNA.

B. A la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe):

1. Cualquier documento, protocolo o guía que utilice la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para la evaluación de permisos sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles, además de las leyes y reglamentos aplicables.

2. Número de querellas sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles presentadas ante la OGPe para los siguientes períodos:

- a. Del 30 de octubre al 31 de diciembre de 2010
- b. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
- c. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
- d. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
- e. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
- f. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
- g. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
- h. Del 1 de enero al 19 de septiembre de 2017
- i. Del 20 de septiembre al 31 de diciembre de 2017

3. Copia de todas las querellas sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles presentadas ante la OGPe desde el 21 de septiembre de 2017 al presente.

4. Copia de todos los permisos sobre corte, poda, trasplante y sistema de árboles, o permisos de uso incidental operacional relacionados a autorizaciones de corte, poda, trasplante y sistema de árboles aprobados desde el 21 de septiembre de 2017 al presente.

5. Copia de cualquier acuerdo colaborativo, memorando de entendimiento o escrito sobre tala y poda de árboles suscrito por la OGPe con agencias y entidades del gobierno federal o, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico, entre el 1 de enero de

2005 y el presente, o que, habiéndose suscrito con anterioridad a esas fechas, permanezca en vigor.

6. Cualquier imagen o fotografía aérea de las siguientes zonas entre el 1 de enero de 2005 y el presente, con indicación de la fecha de cada imagen, para las siguientes áreas:

- a. Playa Cerro Gordo, Vega Alta
- b. Parque Monagas, Bayamón
- c. Zona costera del Municipio de Loíza
- d. Zona costera de Punta Santiago en el Municipio de Humacao

Además, se solicita al Tribunal que ordene a las partes recurridas a proceder con la divulgación prospectiva de esta información cuando le sea solicitada, en los mismos términos en los que le sea ordenado divulgar, y en cumplimiento con el Artículo 4 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9914 (2020), y con la normativa constitucional sobre acceso a la información en nuestra jurisdicción.

Por último, se solicita de este Tribunal la imposición del pago de las costas y los gastos de litigio, así como cualquier otro remedio que proceda en derecho.

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 2021.

(f) Luis José Torres Asencio

Colegiado Núm. 17087
TS Núm. 15610
Clínica de Asistencia Legal
Facultad de Derecho UIPR
PO Box 368038
San Juan, PR 00936-8038
Tel. (787) 209-6375; Fax: N/A
C/E: luis.jose.torres.asencio@gmail.com

(f) Steven P. Lausell Recurt

Colegiado Núm. 17958
TS Núm. 16644
Clínica de Asistencia Legal
Facultad de Derecho UIPR
PO Box 194735
San Juan, PR 00919-4735
T. 787-751-1600; F. 787-751-1867
C/E: slausell@gmail.com

(f) Gleniel Valentín Colón

Estudiante a cargo del caso
gleniel.valentin@lex.inter.edu

Se presenta libre de derechos en virtud del Artículo 9 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9919 (2020), y por las partes recurrentes estar representadas por el Proyecto de Acceso a la Información de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 4 LPRA § 303a (2020).